



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

RESOLUCIÓN

Exp.: 068/2024

Archivo de actuaciones

Fecha entrada: 16/07/2024

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 16 de julio de 2024 tiene entrada en el Registro general del Consejo General del Poder Judicial una reclamación de AAA, referida al Juzgado de Menores número 2 de YYY, cuyo contenido es el siguiente:

«Expediente de reforma (menores) 211/2024/1

En relación al expediente referenciado en el que está inmersa mi hija menor BBB, se recibe cédula de notificación en mi domicilio, por parte de un funcionario civil del ayuntamiento de XXX, entregando la cédula que consta de 4 folios, sin ningún sobre, teniendo acceso cualquier persona a los datos de los menores implicados, víctimas y perjudicados,, motivos del expediente etc.

No es correcto debería de in cerrado en un sobre, protegido protegiendo todos los datos de los implicado y afectados y aún más si cabe cuando son menores de edad, que prima su protección. Donde está la protección de datos?. Espero sirva para futuras notificaciones, cuesta poco poner en un sobre la notificación».

Adjunta a la solicitud copia del Decreto dictado por el Juzgado de lo Social nº 34 de ZZZ en fecha 29 de abril de 2024 en la Ejecución núm. 23/2023.

Segundo.- Mediante comunicación del Director de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial de 6 de agosto de 2024 se acusó recibo al reclamante, requiriéndose al órgano judicial en esa misma fecha información sobre los hechos a que se refiere la reclamación. En fecha 29 de octubre de 2024 tuvo entrada en el Registro general del Consejo el informe del órgano judicial en el que se señala lo siguiente:

«Conforme se interesa por el Consejo General del Poder Judicial, y en relación a reclamación efectuada por el padre de la menor de referencia BBB, seguidamente se EXPONE,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Que lo sucedido no corresponde a este Juzgado de Menores 2 de YYY, pues lo único que se hizo es remitir, como establece la Ley de Menores, en SOBRE CERRADO y para ser notificado a la menor y a sus legales representantes, el Auto de incoación del procedimiento conforme a lo preceptuado en los arts. 16 y siguientes de la propia Ley. La competencia de estos Juzgados es provincial, y en consecuencia, tanto las notificaciones como las demás actuaciones se llevan a cabo mediante Exhortos, que se envían a los Juzgados de las poblaciones en las que tienen su domicilio las partes. Dichos Exhortos se remiten, como no podía ser de otra forma, en sobres completamente cerrados, y a partir de este momento, lo que haga o acuerde el Juzgado exhortado queda fuera de nuestra competencia. No podemos intervenir en la forma en la que el Juzgado de la población de XXX ha efectuado la notificación que nos ocupa, si le fue entregada a la persona interesada, o a algún vecino que por no estar los interesados en su domicilio, se hizo cargo de la misma.

Y todo ello, se Informa a los efectos de lo solicitado, y en relación al Expediente 068/2024, abierto en el departamento de Protección -Datos».

Tercero.- Por comunicación del Director de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial de 28 de octubre de 2024, se remitió requerimiento al Juzgado de Paz de XXX sobre los hechos a los que se refiere la reclamación. En fecha 15 de noviembre de 2024, tuvo entrada en el Registro general del Consejo el informe del órgano judicial, suscrito por el Secretario del Juzgado de Paz en el que se señala lo siguiente:

«PRIMERO. El procedimiento de notificación que seguimos en el Juzgado de Paz, es el siguiente: cuando se entrega al interesado o su representante legal, se entrega la documentación mediante diligencia que cumple el funcionario que se encarga de notificar; si no es el interesado o su representante legal quién la recibe se entrega en sobre cerrado.

El Real Decreto Legislativo 5/2021 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, en su artículo 52 determina los deberes de los empleados públicos y su código de conducta, entre los que se encuentra la confidencialidad.

«Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.»



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Asimismo, el modo de proceder a la notificación se desarrolla en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en el art 161, donde en el punto 3, se determina que si no es el interesado quién la recibe, debe ir en sobre cerrado.

Art 161.3 LEC. «Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiéndolo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero, advirtiéndolo en todo caso al receptor de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario»

SEGUNDO. Considerando que el funcionario cumple con diligencia su labor, cuyo deber de confidencialidad se encuentra en su código de conducta; siendo que quién recibe la notificación es el interesado a través de su representante legal; entiendo que la notificación ha cumplido los requisitos legales necesarios.

No obstante, puedo entender la preocupación del padre (representante legal) del menor, por la posible repercusión pública del contenido de la notificación, contenido que se mantiene bajo el deber de confidencialidad del funcionario público.

TERCERO. Por todo lo anterior, termino el deber de información solicitado por usted, confiando que la labor del Juzgado y del funcionariado sea considerada ajustada a la legalidad».

Cuarto.- Por comunicación del Director de Supervisión y Control de Protección de Datos de fecha 18 de noviembre de 2024, se requirió al Juzgado de Paz de XXX, a fin de que aclarase los términos del informe en concreto se procediera a especificar la persona a la que iba dirigida la cédula de notificación, la persona en la que se realizó la misma y, si se hizo entrega de la documentación judicial en sobre cerrado. En fecha 26 de noviembre de 2024, ha tenido entrada en el Registro general del Consejo General del Poder Judicial el informe emitido por el Secretario del Juzgado de Paz de XXX, en los siguientes términos:

«PRIMERO. La cédula de notificación iba dirigida a BBB y sus representantes legales.

SEGUNDO. La persona que recibió la notificación fue CCC, representante legal de la menor.

TERCERO. Se entregó directamente la documentación en legajo grapado. No iba en sobre cerrado, puesto que, tratándose de su representante legal, el artículo 161.3 LEC interpretado a "sensu contrario" expresa que siendo el interesado



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

(representante legal) quien la recibe puede entregarse directamente, sin ser necesario entregarla en sobre cerrado.

Art 161.3 LEC. «Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiéndolo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero, advirtiéndolo en todo caso al receptor de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario».

CUARTO. No hay inconveniente en introducir cualquier documento judicial en sobre cerrado cuando vaya a ser recibido o entregado a persona distinta del interesado o su representante legal; entendiéndose la preocupación del representante legal.

QUINTO. Considerando que el funcionario cumple con diligencia su labor, cuyo deber de confidencialidad se encuentra en su código de conducta; siendo que quién recibe la notificación es el interesado a través de su representante legal; entiendo que la notificación ha cumplido los requisitos legales necesarios.

SEXTO. Por todo lo anterior, termino el deber de información solicitado por usted, confiando que la labor del Juzgado y del funcionariado sea considerada ajustada a la legalidad».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los tratamientos de datos personales que se realizan en el marco de los procedimientos judiciales se rigen por la normativa de protección de datos. Así se desprende del artículo 2, apartado 4, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: "[e]l tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de que sean competentes, así como el realizado dentro de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables".

Por su parte, el artículo 236 bis de la Ley Orgánica 1/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), establece en su apartado 1 que



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

"[el] tratamiento de los datos personales podrá realizarse con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Tendrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional".

En consonancia con ese precepto, y siguiendo la LOPJ, su artículo 236 apartado 1 precisa que *"[el] tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales".*

Y el apartado 2 del mismo precepto dispone que *"[e]n el ámbito de la jurisdicción penal, el tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos, diligencias o expedientes de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos personales tratados con fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales y, en su caso, por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".*

Segundo.- Estos artículos deben ponerse en relación con el artículo 236 octies de la LOPJ que atribuye a la Dirección de Supervisión y Control del Consejo General del Poder Judicial, respecto a las operaciones de tratamiento de datos con fines jurisdiccionales que realicen los Juzgados y Tribunales y las Oficinas Judiciales, diversas funciones, entre las que se encuentran la supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales mediante el ejercicio de la labor inspectora (letra a) y la tramitación de las reclamaciones interpuestas por los interesados, informándose al reclamante sobre el curso y resultado de la reclamación en un plazo razonable, previa realización de la investigación oportuna si se considera necesario (letra e).



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Estas funciones del artículo 236 octies de la LOPJ, se complementan, a su vez, con aquellas que sean aplicables de las recogidas tanto en el artículo 57 del Reglamento General de Protección de Datos, y en el artículo 48 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

En consecuencia, la competencia de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial se ejerce respecto de los tratamientos de datos personales efectuados con fines jurisdiccionales, cuya caracterización se recoge en el apartado primero del artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor "*[t]endrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional*".

Tercero.- Los hechos objeto del presente expediente se refieren a la práctica de una diligencia judicial en un domicilio particular de un representante legal de un menor. En consecuencia, se dan los elementos caracterizadores de los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales siendo competente para su conocimiento el Consejo General del Poder Judicial.

Cuarto.- Los artículos 149 a 168 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regulan de forma detallada los actos de comunicación judicial, incluyendo en el apartado 3 del artículo 152 que se puedan efectuar a través de procurador, correo, telegrama o correo electrónico, o entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar.

De forma más específica y vinculado con los hechos objeto de la reclamación, el artículo 161.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé: "*Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiéndolo*



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero, advirtiéndolo en todo caso al receptor de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario”.

En este sentido, según la información aportada por el Juzgado de Paz de XXX figura que el aquí reclamante es el representante legal de la menor a la que iban dirigidas las notificaciones, que fueron realizadas a la madre de la misma, y también representante legal, por lo que fueron entregadas en mano sin introducirlas en sobre alguno.

Por tanto, no cabe apreciar en el tratamiento a que se refiere la reclamación ninguna vulneración de la normativa de protección de datos y, más concretamente, de los principios rectores de los tratamientos de datos contenidos en el artículo 5 del Reglamento general de protección de datos.

Quinto.- Habiendo quedado delimitados los hechos denunciados en la reclamación presentada y en el informe Juzgado de Paz de XXX, no procede llevar a cabo ulteriores actuaciones de investigación en relación con los mismos, debiéndose proceder al archivo de las actuaciones del presente expediente.

Por lo expuesto,

ACUERDO

1.- Archivar las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación formulada por AAA frente al Juzgado Menores núm. 2 de YYY y al Juzgado de Paz de XXX, registrada con el número de expediente 068/2024.

2.- Notificar la presente resolución a AAA, al Juzgado Menores núm. 2 de YYY y al Juzgado de Paz de XXX.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, en el plazo de un



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Firmado digitalmente
Francisco Javier Sempere Samaniego
Director de Supervisión y Control de
Protección de Datos (e.f.)